



Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

## LA DEMOCRACIA en América Latina

### Investigación señala erosión de la confianza en los gobiernos elegidos de América Latina

Más de la mitad de los latinoamericanos (el 54,7%) dice que cambiaría la democracia por un régimen autoritario si este fuera capaz de solucionar los problemas económicos. Este es uno de los principales alertas contenidos en el informe “Democracia en América Latina”, lanzado el 21 de abril por el PNUD (Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo).

El porcentual de personas dispuestas a renunciar a los avances democráticos fue apurado en una investigación con cerca de 10 mil latinoamericanos, aplicada en 18 países de la región. El informe destaca que, a pesar de la consolidación de la democracia electoral en América Latina en los últimos 25 años, los gobiernos democráticamente elegidos no fueron capaces de satisfacer a las aspiraciones políticas, sociales y económicas de sus electores. Para el 64,7% de los entrevistados, los gobernantes no cumplen lo que prometen porque mienten para ganarse las elecciones.

Desde el 2000, cinco presidentes elegidos democráticamente en algunos de los 18 países estudiados en el informe de PNUD abandonaron sus cargos antes del final de sus mandatos, después que la pérdida de apoyo político hizo prácticamente imposible que siguiesen gobernando. Y muchos presidentes de la región aún luchan para evitar destino semejante.

Entre las causas señaladas por el informe está la contradicción de que la primera generación de latinoamericanos que se benefició de la consolidación del régimen democrático no experimentó en ese período prácticamente ningún crecimiento del ingreso per capita, pero asistió al crecimiento de la desigualdad de ingresos en el continente, que ya era la más grande del mundo.

Simultáneamente, gran parte de los latinoamericanos se quejan de que no pueden contar con un tratamiento igualitario ante la ley, de la corrupción, de la ineficiencia del Judiciario, de la falta de profesionalismo combinada con el abuso de fuerza por la policía y de la incapacidad de los gobiernos para proveer los servicios básicos.

Completa el cuadro la crisis de los principales partidos políticos en la mayoría de los países de la región (apenas el 27,2% de los latinoamericanos dicen tener un partido y votar siempre en él), que crea inestabilidad y abre camino al surgimiento de liderazgos personalistas.

“El corazón del problema es que, si la democracia se extendió ampliamente en América Latina, sus raíces no son profundas”, escribe Mark Malloch Brown, administrador de PNUD, en el prólogo del informe. Por primera vez la democracia es la forma de gobierno preponderante en América Latina y, si las cosas están malas en términos de empleo, ingresos y servicios básicos, los gobernantes reciben la culpa por esto.

Si la libertad de prensa, la protección a los derechos humanos, la independencia y eficiencia del Poder Judiciario aún necesitan un fortalecimiento substancial, hay, en la opinión de Brown,

señales muy alentadoras: a pesar de la crisis, los países de la región no regresaron al autoritarismo. Por el contrario, mantuvieron sus instituciones democráticas, y, simultáneamente, los ciudadanos empezaron a distinguir la democracia como sistema de gobierno del desempeño de sus gobernantes. "Muchos de estos ciudadanos son apenas 'demócratas insatisfechos', un fenómeno bien conocido en muchas de las democracias establecidas", escribe el administrador de PNUD.

A pesar de señalar la desigualdad y la pobreza como sus principales deficiencias, el informe reconoce los avances de la democracia como régimen político en América Latina: en todos los países se reconoce el derecho universal al voto; a pesar de algunos problemas localizados, las elecciones fueron limpias entre 1990 y 2002; y la transición se ha tornado una práctica común.

El documento, sin embargo, propone que sea empleada, con urgencia, una política que eleve la democracia electoral del continente a un nivel de ciudadanía integral, al que llama democracia ciudadana. Este concepto comprende no sólo la democracia como sistema político e institucional, pero los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de los ciudadanos.

Eso incluye, entre otras cosas, propiciar un acceso más amplio de las parcelas de afrodescendientes y de indígenas y sus descendientes a las plazas del Parlamento, disminuir las deficiencias del control que los ciudadanos ejercen sobre la acción estatal, aumentar el respecto a los derechos a la vida y a la integridad física.

El informe resalta que los grupos más excluidos del ejercicio pleno de la ciudadanía son los mismos que sufren con las carencias económicas. Los indicadores muestran que todos los países de la región tienen niveles de desigualdad de ingresos superiores al promedio mundial y que, en 15 de los 18 países estudiados, más del 25% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. "Sólo será posible disminuir la desigualdad cuando haya una reducción sostenible de la pobreza y cuando sean mejoradas las posibilidades de crecimiento económico".

Tanto la investigación de opinión realizada junto a la población cuanto las entrevistas realizadas con los liderazgos del continente señalan que existe la necesidad de que se reconozca que América Latina pasa por un momento de inflexión y crisis. Y que el fortalecimiento de la democracia pasa por la recuperación de la política como organizadora de las decisiones de la sociedad. En el centro de esta cuestión está el fortalecimiento de la ciudadanía.

La agenda propuesta por el informe prevé, entre otros objetivos, el fortalecimiento de la sociedad civil, un amplio debate sobre el papel del Estado, la economía y la globalización, la reforma de las instituciones, incluyendo formas de elección que aseguren mayor equilibrio entre gobernabilidad y representación política.

"No hay democracia sostenible sin un Estado capaz de promover y asegurar el ejercicio de la ciudadanía. Con Estados mínimos y sin fuerza, solo se puede aspirar mantener las democracias electorales. La democracia ciudadana requiere una estabilidad que asegure la universalidad de los derechos".